Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

CLACSO

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Costa Rica

Febrero de 2011

Editada en diciembre de 2012

Asdi
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

Norad
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo

Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo Nº 861

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de
Costa Rica

Integrantes

Sindy Mora Solano
Alejandro Alvarado Alcázar
Mercedes Álvarez Rudín

Fuentes

Diario Extra y La Nación

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.
La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Costa Rica
Cronología del conflicto social
Febrero de 2011

Miércoles 2

Un grupo de vecinas y vecinos, además de taxistas y autobuseros de la zona de Talamanca, en la provincia de Limón, cierra el paso por la ruta 36 en señal de protesta por el mal estado en que se encuentran las vías en la ruta 256, desde Hone Creek hasta Manzanillo, y en la 801, entre Bribrí y Chiroles, las cuales son rutas importantes para el tránsito de turistas hacia el Caribe costarricense. Es por esto que las y los manifestantes le exigen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asfaltar 30 km de vía, compromiso asumido por la viceministra del ramo, quien señala que a más tardar en un mes estarían enviando maquinaria a trabajar en la zona.

Vecinas y vecinos de Ciruelas, en la provincia de Alajuela, bloquean el paso por la calle que conecta el sector de la estación de revisión vehicular de Riteve SyC con Los Llanos, como medida de protesta por los constantes cortes de luz provocados por los camiones que se llevan los cables del tendido eléctrico al transitar por la zona. Las y los manifestantes señalan que el problema tiene más de 15 años y que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no lo ha solucionado pese a reiteradas solicitudes de su parte.

Jueves 3

Un grupo de unas 50 personas protesta en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de San José, contra el ex presidente Óscar Arias y su hermano y ex ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. La convocatoria a este acto se realiza mediante las redes sociales bajo consignas como “Un Arias nunca más”. La protesta se da en momentos en que la asamblea legislativa discute la posibilidad de crear una comisión que investigue a Rodrigo Arias por su supuesta injerencia sobre el Ministerio Público para frenar una indagatoria a su persona por mal manejo de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Martes 8

Aproximadamente doscientas vecinas y vecinos del cantón de Siquirres, en la provincia de Limón, bloquean el tránsito sobre la ruta 32, que conecta a las provincias de Limón y San José, para exigirle a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la construcción de varios puentes arrasados por las lluvias. Los puentes que piden sean construidos son los de Las Cabras y El Negro, por los cuales transita una cantidad importante de personas todos los días. Uno de los participantes en la protesta denuncia que dos mujeres fueron agredidas por la policía y pide que se concrete cuanto antes el anuncio de la CNE de destinar 534 millones de colones para la construcción de estos y otros puentes en la provincia.

Miércoles 9

El Foro Nacional de Taxistas anuncia la realización de una marcha desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Casa Presidencial, en la provincia de San José, para solicitarle a la presidenta Laura Chinchilla la aplicación inmediata del Decreto Ejecutivo Nº 34.095, que formaliza la figura del porteo. Ante esta situación, representantes de la seccional de taxistas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, conocida como ANEP-Taxistas y de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), declaran su desacuerdo con la aplicación de dicho decreto por cuanto supone una competencia desleal con las y los taxistas.

Jueves 10

La Asociación Administradora del Acueducto de Jericó denuncia que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realiza perforaciones en el cerro Tablazo en la zona de Jericó de Desamparados, en la provincia de San José, para colocar postes y electrificar una zona de alta vulnerabilidad y cercana a nacientes. Dicha asociación se comunica con la compañía y con la municipalidad de Desamparados para señalarles que dichos trabajos se están realizando a pesar de que hace tres meses un ingeniero de la CNE advirtió el alto riesgo de deslizamientos en la zona. Además, denuncian que la colocación de postes y la electrificación sólo beneficiarán a dos propietarios. Ante esta situación, Maureen Fallas, alcaldesa de Desamparados, indica que le solicitarán a la CNFL que frene las labores por tratarse de una zona boscosa con riesgo de deslizamientos.

Un grupo de vecinas y vecinos del cantón de Santa Ana, en la provincia de San José, apoyado por el Concejo Municipal, solicita al Consejo de Transporte Público y al MOPT que revoque el permiso otorgado a la empresa Tapachula S.A. para prestar el servicio de autobús en la ruta San José-Santa Ana. De acuerdo con las y los denunciantes, esta empresa presta el servicio desde 2005 sin haber sido sacada a concurso la licitación de la ruta, como establece la Ley Reguladora de Transporte Remunerado. Además de esto, denuncian que la empresa ofrece un servicio de mala calidad, no erradica el maltrato que hay a las y los adultos mayores e incumple con los horarios, además de que las unidades están en mal estado.

Martes 15

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba exige al ICE desistir de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Diquís” en la zona sur del país y acuerda un plazo de ocho días para desalojar los territorios indígenas ocupados por éste. Según señalan dirigentes indígenas, un 10% de las 7 mil 600 hectáreas que la institución pretende anegar para la represa corresponde a tierras indígenas, por lo que anuncian medidas de presión tales como la recuperación de tierras a la fuerza, demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo y denuncias al país ante organizaciones internacionales de derechos humanos, en caso de que no abandonen el territorio indígena. A través del vocero de prensa, la institución declara que el director del proyecto se encuentra en la zona conversando con las distintas organizaciones, además de que cuenta con un equipo interdisciplinario para informar a las poblaciones sobre los impactos del proyecto.

Miércoles 16

Un grupo de sindicatos, entre ellos la ANEP, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) y la Central General de Trabajadores (CGT), anuncian el plan de medidas de protesta que aplicarán durante las próximas semanas para enfrentar la política salarial del poder ejecutivo, así como la reforma fiscal y la privatización de los puertos de Moín y Limón. Entre las medidas contenidas en el plan se encuentra la realización de una concentración frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una huelga nacional y una marcha a la asamblea legislativa el 10 de marzo. Además de esto, señalan que mantendrán actividades de protesta constantes hasta el mes de julio para enfrentar la política salarial del gobierno, pues aseguran que el aumento propuesto no alcanza para cubrir las alzas de los servicios y la canasta básica.

Jueves 17

Un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de La Lucha de Desamparados, en la provincia de San José, corta la ruta 22 para manifestar su desacuerdo con el cierre del Equipo Básico de Atención Integral en Salud de la comunidad. Tras la última época lluviosa las instalaciones del EBAIS sufrieron una serie de daños, razón por la cual las autoridades anunciaron su cierre definitivo, lo que obligaría a unas 3 mil personas a trasladarse al de San Cristóbal, a unos 3 o 4 kms. de distancia, para ser atendidas.

Miércoles 23

Un grupo de porteadores, miembros de la Federación Nacional de Porteadores (FENAPO), se concentra en distintos puntos del país, principalmente en la capital, San José, para exigir que no se apruebe el proyecto de ley que pretende reformar el artículo 323 del Código de Comercio, que regula el porteo. Además de eso, los porteadores se oponen al plan que pretende otorgar permisos para sólo el 30% de las personas que laboran en esta actividad, dejando al restante 70% sin un régimen de trabajo que los proteja. Otro grupo de porteadores se moviliza hasta la Casa Presidencial, en la provincia de San José, para entregar una carta a Francisco Marín, viceministro de la Presidencia, en la que piden que el proyecto de ley sea retirado de la asamblea legislativa.

Tras mantener una reunión con representantes del gobierno, las organizaciones sindicales ratifican su decisión de irse a huelga el próximo 10 de marzo, por cuanto consideran que el poder ejecutivo no llevó ninguna propuesta concreta a la mesa de negociación. Los dirigentes sindicales señalan que esperaban una posición diferente por parte de la representación del gobierno, en la que figuraban la ministra y el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, el viceministro de Hacienda y representantes del Servicio Civil, pero que lo que recibieron fue “un plato de babas”. Por su parte, Sandra Piszk, ministra de Trabajo y Seguridad Social, califica a la reunión como “positiva”, pues se conformaron comisiones para estudiar la política salarial a mediano y largo plazo, dado que realizar un ajuste salarial en lo que resta del 2011 es “imposible”.

Estudiantes, madres y padres de familia se concentran frente al liceo de Alajuelita, en la provincia de San José, para exigir un cupo para cerca de 70 estudiantes de séptimo y octavo año que se

quedaron sin matrícula en ese centro educativo. De acuerdo con las y los manifestantes, el director del liceo alega la falta de cupo para aceptar a más estudiantes. Sin embargo, cada sección del liceo tiene entre ocho y quince estudiantes, por lo que demandan que se amplíe la matrícula. *Diario Extra* reporta que el director se da a la "fuga" en un taxi, mientras esperan la llegada del supervisor regional para discutir la problemática.

Glosario de siglas

ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
APSE	Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
CGT	Central General de Trabajadores
CNE	Comisión Nacional de Emergencias
FENAPO	Federación Nacional de Porteadores
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
SINTRAJAP	Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
UTC	Unión de Taxistas Costarricenses

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).
Coordinación: Sindy Mora Solano.
Relevamiento y sistematización a cargo de Alejandro Alvarado Alcázar y Mercedes Álvarez Rudín.
Fuentes: Diario Extra y La Nación.